

Democracia republicana: el juego de la oca (2006)

La Gaceta, Tucumán 20/08/06

Como en el juego de la oca, hoy en la Argentina la democracia republicana retrocede tres casillas y pierde un turno. Para quienes se ilusionaron con la posibilidad de reconstruir la democracia anunciada en 1983 y averiada desde 1989, tres años de gobierno de Kirchner dejan pocas dudas. Esto no supone un juicio global sobre el gobierno actual, ni una opinión sobre su política económica, social o internacional. Se refiere estrictamente a esa conjunción entre un gobierno legitimado en la voluntad popular, y todos aquellos atributos que nuestra Constitución ha caracterizado como propios del sistema republicano de gobierno: régimen representativo, división de poderes, libertad de expresión, publicidad de los actos de gobierno y, más en general, lo que los clásicos llamaron la majestad de la ley.

En 1912 la Argentina ingresó en la era de la democracia de masas, pero no lo hizo por la puerta republicana. Durante la primera mitad del siglo XX la sociedad pudo acompañar su desarrollo. La prosperidad económica, sustentada primero en el ciclo agropecuario y luego en el industrial, permitió la sucesiva incorporación de los migrantes externos e internos. Hubo empleo para todos, y la mayoría tuvo posibilidades de mejorar su situación, en términos de ingresos, vivienda –la célebre “casa propia”–, consideración social, educación y derechos políticos y sociales. El estado hizo su parte. Primero, a través de un sistema educativo tan abarcativo como excelente. Luego, extendió los derechos sociales y “democratizó el bienestar”, según la feliz expresión de Pastoriza y Torre. En ese sentido –movilidad, integración, oportunidades– la Argentina fue una sociedad democrática.

Quizá por eso la democracia política arraigó tan profundamente en el imaginario social: lo vemos en el entusiasmo con que se aprendieron las rutinas electorales luego de 1912, en la elección plebiscitaria de Yrigoyen en 1928, en la apasionada disputa de 1946 sobre dos formas de entender la conjunción entre democracia y derechos sociales, y hasta en los argumentos de quienes derrocaron a Perón. Hasta 1955 predominaron los gobiernos con amplia legitimación democrática. Lo que no se desarrolló fue la variante republicana y liberal de la democracia; la que existió, encaja más fácilmente en el subgrupo de las llamadas –recuérdese a Weber– plebiscitarias de líder. Dos rasgos así lo indican. Uno es el avance del presidente sobre el resto de las instituciones, una práctica tradicional, pero robustecida por la idea de mandato popular. El otro es la identificación del movimiento o el partido político con el “pueblo” o la “nación”, tan afín al radicalismo yrigoyenista como al peronismo, y la consecuente remisión de los opositores a la esfera de los enemigos del pueblo o la antipatria. Además, el peronismo incursionó en un terreno en el que los gobiernos radicales nunca penetraron: el de las libertades cívicas y personales.

De modo que, vista en conjunto, esa primera mitad del siglo XX presenta la coexistencia, quizá paradójica, de una sociedad democrática, un imaginario democrático arraigado, y una práctica política democrática que discurrió por cauces ajenos a la tradición republicana. Hay varias explicaciones posibles, pero lo cierto es que nuestra larga primera experiencia democrática fue escasamente republicana.

Desde 1955, y hasta 1983, las cosas empeoraron. En el juego de la oca, tuvimos sucesivos retrocesos y turnos perdidos. A ello contribuyeron los largos períodos de dictadura militar, y sobre todo, la proscripción del peronismo en 1955, que esterilizó cualquier proyecto legítimo de normalización democrática. Por otra parte, los distintos grupos de interés,

incluyendo el sindicalismo peronista, se adaptaron muy bien a un juego de negociaciones que se daba en escenarios corporativos. Por esas razones, el imaginario democrático se deterioró aceleradamente, y en 1966 no quedaba prácticamente nada de él. Hacia 1968, con la vasta movilización social, se manifestó una voluntad de participación y cambio –uno de los componentes de la práctica democrática-, pero por entonces la alternativa institucional democrática estaba ausente de cualquier proyecto, inclusive el que triunfó en las elecciones de 1973. Finalmente, la dirección quedó en manos de quienes ofrecían alternativas de la violencia.

La última dictadura militar fue un parteaguas en nuestra cultura política. Su final anunció un cambio brusco de escenario. Entonces, la democracia adelantó varias casillas de un salto. La violencia inusitada que se había ejercido desde el estado alimentó un entusiasmo hasta entonces poco conocido por la democracia, en sus formas liberal y republicana. El horror de la represión le dio un nuevo fundamento a una concepción ética de la política, en la que ningún fin justificaba la violación de los derechos. Sobre ese fundamento se asentó un renovado liberalismo y un respeto y valoración de los derechos humanos, la pluralidad, la discusión racional y los acuerdos. La civilidad podía constituirse, por encima de las diferencias políticas, apoyada en el respeto a la ley y las instituciones, y solo excluía a los responsables y defensores del terrorismo.

Por entonces, la nueva democracia republicana carecía de tradiciones, de dirigentes y hasta de ciudadanos educados. Se investió de legitimidad por la sólida convicción colectiva acerca de su capacidad para resolver todos los problemas de la sociedad. La democracia no solo era buena; también era potente. Esa ilusión tuvo su costado virtuoso: sin ella no habría habido democracia republicana. Pero hubo mucho de sobrestimación de los mecanismos que rigen la convivencia y de subestimación de los problemas de la nueva Argentina, creada por la dictadura militar, que explotarían progresivamente, como bombas de acción retardada. La combinación dictatorial de represión salvaje y neoliberalismo había dejado una sociedad empobrecida y fuertemente polarizada. El estado estaba igualmente dañado, tanto por la corrosión de las instituciones cuanto por las reformas que, en sustancia, consistían en eliminar los instrumentos de control y aumentar los márgenes de arbitrariedad, o el prodigioso endeudamiento externo, que reducía su margen de autonomía.

La percepción de estas limitaciones nos explica la desilusión democrática, que fue tan profunda e intensa como la ilusión precedente. Los ciudadanos activos perdieron su fe en 1987, cuando descubrieron que la democracia era impotente frente a los poderes corporativos, particularmente el militar. En 1989 la desilusión alcanzó a quienes esperaban de la democracia la prosperidad o al menos la estabilidad. Su reacción fue confiar en el mesías, y aceptar la salida propuesta, que incluía un gobierno de estilo principesco y un fuerte avance sobre la institucionalidad republicana. En veinte años, la democracia republicana tuvo avances y retrocesos. Estos fueron mayores que aquellos, pero la base de convicciones se mantuvo, y un balance de la democracia realmente existente permitía tanto juicios pesimistas como optimistas. Las cosas no eran como lo soñado en 1983, pero las instituciones estaban estabilizadas, había elecciones regularmente, los ciudadanos sabían cumplir con su cometido, y había dirigentes capacitados y profesionales, aunque un poco corruptos. En fin, una rutina aceptable.

Pero en 2001 la crisis fue mucho más fuerte, y agitó sospechas sobre el sistema político, los representantes y la representación misma. Las formas directas de la democracia, que

históricamente han acompañado, como un contracanto, a las representativas, canalizaron la protesta contra una democracia que, según algunos, no solo no hacía nada por la igualdad sino que favorecía la desigualdad. La crisis que transcurrió durante el año 2002 fue profunda y estimuló la reflexión colectiva. No faltaron las miradas apocalípticas, pero otros creyeron llegado el momento de reconstruir sobre las ruinas y –puesto que la crisis había sido tan profunda- recuperar el impulso inicial de construir una democracia republicana. Se trataba de aprovechar lo que en veinte años se había construido de positivo y descartar lo negativo. Quizá se debió a la conmemoración de los veinte años de la democracia republicana. Lo cierto es que pareció que el sentido del juego podía cambiar, si no de manera espectacular, al menos de un modo sólido y consecuente.

Desde mediados de 2002 se acumularon señales positivas: la gradual reconstrucción de la autoridad presidencial, el modo admirable con que se salía de la pinza financiera, la eficacia con que se contenía el desborde social. Del nuevo gobierno no se esperaba la panacea –otro signo de madurez- sino apenas señales sobre la voluntad de afirmar la república, fortalecer el estado despejando las agencias estatales de los intereses corporativos instalados en ella, y sanear la gestión y las prácticas políticas.

Debo seguir escribiendo en primera persona. Personalmente, procuré postergar el juicio global y seguir cada problema, cada medida, pues entendí que ningún gobierno puede enfrentar todas las cosas a la vez. Busqué no solo gestión, sino señales, indicios, actitudes, pedagogía social. Traté de pensar en el vaso medio lleno, más que en la parte vacía. Pero hoy el juicio ya me parece claro, y desilusionante. Encuentro en este gobierno la renuncia evidente a dos promesas: la de limpiar los establos de Augias del estado – a los sumo puede decirse que han cambiado las fuentes del estiércol- y la de impulsar la “nueva política”: cualquier sueño en este sentido murió durante las últimas elecciones. El pluralismo ha pasado de moda, sepultado por las andanadas presidenciales contra los disidentes, de afuera y de adentro. Inclusive, reaparece el discurso de la unidad nacional, y ronda la acusación contra los agentes de intereses antinacionales, como los periodistas o los carniceros. La defensa de los derechos humanos, un campo en el que más positivamente se perfiló la política del gobierno, se ha convertido en una herramienta facciosa. Finalmente –cualquiera puede apreciarlo- el notable poder presidencial que se construye tiene mucho más de personal que de republicano. Si los sucesos de 2001 pudieron hacer pensar en una suerte de revolución francesa, desde 2003 hemos entrado, en el mejor de los casos, en la era del imperio napoleónico, plebiscitario y paternal.

Al cabo de tres años, en este juego de la oca, del largo empeño por construir la democracia republicana, creo que hemos perdido un turno y retrocedido algunas casillas. ¿Hasta dónde? Por suerte, ni al pozo de la segunda mitad de los setenta, ni tampoco a la violenta ebullición de la primera mitad. La democracia que tenemos hoy se parece muchísimo a la de la primera mitad del siglo XX: personalista, plebiscitaria, bastante facciosa y bastante poco republicana. Pero hay una gran diferencia, que induce a la razón –no al corazón- a la resignación: nuestra sociedad ha dejado de ser democrática, y probablemente lo será cada vez menos en el futuro cercano, pues los procesos sociales y culturales tienen inercia y arrastre, y los problemas educativos de hoy los percibiremos en los próximos diez años.

A diferencia del juego de la oca, que en algún momento llega a su fin, esta democracia republicana, inscrita en nuestra Constitución, no constituirá el inexorable final feliz de la historia. No lo fue nunca, en ninguna parte. Pero la experiencia argentina nos la muestra

hoy más bien como una flor exótica, una planta de invernadero que eventualmente crecerá a fuerza de cuidados infinitos y constantes, antes que como un arbusto silvestre, lozano, vigoroso y firmemente arraigado en la tierra, como parece serlo esta suerte de cesarismo democrático en el que vivimos. Quizás haya que aceptar que esta es la democracia posible para la Argentina.